

Preocupante escenario nacional

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador no había atravesado por una coyuntura tan preocupante como la que se ha suscitado en las últimas semanas a raíz de la captura de Mario Beloso, acusado de haber dado muerte, el 5 de julio de 2006, a dos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), así como de otros delitos enmarcados en la recién aprobada ley antiterrorista. A este hecho se suma la captura violenta, el 2 de julio, de un grupo de personas que participaban en una manifestación en Suchitoto, y a las cuales también se les quiere juzgar según la misma ley. No es la primera vez, desde el fin de la guerra civil, que el país se ve amenazado por la irrupción de dinámicas de violencia de carácter político. Sin embargo, en la actual coyuntura —abierta prácticamente con los sucesos del 5 de julio— esas dinámicas se han agudizado, dando pie a un clima de graves tensiones socio-políticas que podrían ser el preámbulo de una espiral de violencia de trágicas consecuencias para la sociedad salvadoreña.

La exacerbación de los ánimos, la intransigencia, el fanatismo, la manipulación y la difamación no contribuyen en nada al enfriamiento de las tensiones; al contrario, las calientan y sobredimensionan, impidiendo que las necesarias dosis de prudencia y moderación se abran paso y marquen las pautas del debate público. Ahora mismo, ese debate casi se ha hecho imposible, porque lo que predomina son los discursos excluyentes y maniqueos, según los cuales la realidad social se divide en buenos y malos, amigos y enemigos, demócratas y comunistas, terroristas y no terroristas. En estos momentos, quienes están imponiendo su voz son los que han hecho una apuesta por la polarización socio-política, de la cual esperan obtener beneficios particulares sin importar los costos que ello pueda tener para la convivencia entre salvadoreños y salvadoreñas. En la misma medida, se echan de menos la prudencia y la moderación, sin las cuales no solo es imposible desactivar el tenso escenario socio-político, sino que es inviable cualquier proyecto de nación mínimamente democrático.

Ahora bien, la moderación y la prudencia no deben ser vistas como un mecanismo de evasión o como la búsqueda de una pretendida neutralidad valorativa. Y es que es demasiado grave la situación de El Salvador como para andar con evasiones o asepsias academicistas. Ser moderados y prudentes no quiere decir no asumir una postura crítica ante los problemas del país y ante los actores involucrados en la tensa coyuntura actual, así como

tampoco significa dejar de lado la búsqueda de las mejores soluciones para la sociedad salvadoreña en su conjunto. En otras palabras, la moderación y la prudencia no excluyen la “toma de partido”, pero no por un sector político determinado, sino por la mayor parte de la sociedad, desde la cual — desde lo que más le conviene a ella en materia de respeto a la legalidad, eficacia institucional, mayores niveles de justicia y ampliación de las libertades civiles y políticas— se deben juzgar —entre otros dinamismos— el ejercicio político-partidario, la gestión gubernamental, el desempeño institucional y el rol de los medios de comunicación.

En este sentido, la actual coyuntura nacional exige una lectura crítica de los principales elementos que llevaron a su configuración. Y esto supone asumir, como punto de partida, que en la misma confluyen varios dinamismos que se fueron perfilando a lo largo de la posguerra, se hicieron evidentes en los últimos años de gobierno de Francisco Flores y han marcado con particular fuerza la vida nacional desde la llegada al Ejecutivo, en 2004, de Elías Antonio Saca. Esos dinamismos han hecho eclosión en el momento actual, saliendo a relucir sus aristas más perniciosas e incontrolables.

Conviene recordar que, en 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz, se daba un importante paso en la transición democrática salvadoreña. Sin dejar de reconocer el déficit sustantivo de los Acuerdos en materia socio-económica —que es donde se encuentra una de las raíces del descalabro posterior del modelo económico terciarizado—, en el plano político se estaban dando las condiciones para dar vida a un ejercicio del poder regido por las reglas democráticas básicas. Es decir, se estaba a las puertas de establecer los cimientos mínimos que permitieran superar una herencia autoritaria de larga data en el ejercicio del poder político en El Salvador.

La euforia inicial generada por el fin del enfrentamiento armado no permitió vislumbrar que las bases de la democratización política no eran lo suficientemente sólidas, que había fisuras en el diseño y ejecución de los Acuerdos de Paz por donde se podía filtrar la amenaza autoritaria. Casi imperceptiblemente, prácticas y actitudes autoritarias se fueron abriendo paso una vez que los Acuerdos fueron declarados oficialmente cumplidos por el gobierno de Armando Calderón Sol. Aunque en esos momentos parecía tratarse del inevitable lastre autoritario con el que determinadas figuras del antiguo régimen encaraban el cambio político en ciernes, posteriormente fue claro que no solo en el seno del aparato estatal estaban cobrando fuerza un conjunto de enclaves autoritarios, sino que era el Estado mismo el que se decantaba hacia un ejercicio autoritario del poder.

Durante los dos últimos años de la gestión presidencial de Francisco Flores, el ejercicio autoritario del poder estatal se hizo sentir de manera abierta en la vida nacional, concretamente en el ámbito de la seguridad pública. El plan Mano Dura puso de manifiesto el encarrilamiento del Estado en la lógica de la coerción y del uso de la fuerza; un plan que inicialmente tenía como uno de sus objetivos el combate de las pandillas, pero cuyos propósitos se enmarcaban en una visión más amplia de la “seguridad nacional”, al estilo de los regímenes autoritarios que asolaron a América Latina en las décadas de los años sesenta y setenta.

Este esquema de seguridad pública de corte autoritario fue heredado por el gobierno de Elías Antonio Saca. Pero este último no solo recibió ese legado: también hizo suya una visión que entiende a la oposición política de izquierda como un obstáculo a eliminar o, cuando menos, a ser superado por los medios que sean necesarios; al movimiento social como algo no solo ilegítimo, sino que no debía ser tolerado bajo ninguna circunstancia; y al propio mandato presidencial como algo que estaba por encima de las leyes de la República, la responsabilidad institucional y la ética cívica.

El gobierno de Saca ha sido consecuente con la herencia recibida; más aún, la ha enriquecido con nuevos elementos que, conjugados con los heredados, han decantado al Estado salvadoreño por la senda de un autoritarismo abierto y sin cortapisas. El plan Súper Mano Dura fue la primera señal de que la administración Saca estaba optando, de entrada, por el autoritarismo. Otra señal la constituyó el papel jugado por el Presidente en el proceso electoral que culminó, en 2006, con la elección de alcaldes y diputados. Abiertamente, el mandatario subordinó su investidura presidencial a su cargo como presidente del COENA, violando la Constitución y sin que la Corte Suprema de Justicia le hiciera ver sus obligaciones constitucionales.

En la misma línea, también es un ejercicio autoritario del poder el uso de la figura del fideicomiso no solo para paliar las necesidades financieras del Estado, sino para evadir el debate político en torno a temas tan delicados como el endeudamiento público. En este punto, el asunto, aunque grave, no es solo que el Estado salvadoreño se siga endeudando, sino que esas nuevas deudas —para pagar pensiones o para financiar programas sociales del Gobierno— se adquieren recurriendo a la mentira, la violación de las leyes y la anulación de la Asamblea Legislativa, foro en el que necesariamente deben discutirse y aprobarse (o rechazarse) las deudas financieras a ser asumidas por el Estado.

La mentira, la violación de las leyes y la anulación del parlamento son consustanciales a un ejercicio autoritario del poder político. En la estrategia de los fideicomisos implementada por el gobierno de Saca, se hacen presentes esos tres elementos. Se miente a la sociedad cuando se usa la palabra “fideicomiso” para referirse a algo que no lo es. Y es que, en términos simples, un fideicomiso es una disposición testamentaria según la cual alguien que desee separarse de sus bienes confía su patrimonio, o parte del mismo, a otra persona para que, bajo ciertas condiciones, los transmita a un tercero o les de un destino determinado (por ejemplo, en una obra de carácter social o humanitario). El fideicomiso es, por tanto, una figura jurídica que regula el proceso de transmisión de una herencia, en el cual quien la otorga se vale de un intermediario para cumplir su voluntad respecto del destino del patrimonio que está legando.

La mentira, la violación de las leyes y la anulación del parlamento son consustanciales a un ejercicio autoritario del poder político. En la estrategia de los fideicomisos implementada por el gobierno de Saca, se hacen presentes esos tres elementos.

Para que haya un fideicomiso, entonces, debe haber primero que nada un patrimonio, que es justamente el que es cedido a un intermediario, por su poseedor original, para que cumpla su voluntad. El gobierno salvadoreño no cuenta en estos momentos con un patrimonio de esa naturaleza (que rondaría los 350 millones de dólares) para sostener sus programas sociales, sino que su intención es crearlo. Para eso se valdrá principalmente de dos mecanismos: en primer lugar, el establecimiento de un fondo base —un “capital semilla”, en la jerga oficial, de 10 millones de dólares— cedido por el Ministerio de Hacienda; y en segundo lugar, la emisión de títulos valores a ser adquiridos por particulares, cuyos montos —más los respectivos intereses— serán posteriormente pagados por el Estado.

En este sentido, el patrimonio —condición básica para que haya fideicomiso— no existe; pero, además, su creación a posteriori no respeta su naturaleza económica y jurídica, porque los recursos a ser otorgados por el Ministerio de Hacienda son fondos públicos, no un patrimonio privado que esa cartera de Estado pueda “heredar” a terceros. Es decir, se trata de una simple reasignación de recursos públicos por parte del Estado a través del Ministerio de Hacienda. En lo que se refiere a los títulos valores, quienes los adquieran no estarán “heredando” nada a la sociedad salvadoreña, sino que prestarán dinero al Estado, que tiene la obligación de pagarles en los plazos estipulados en el contrato correspondiente a esa operación financiera.

Una enorme mentira se esconde, pues, tras la puesta en práctica de la figura del fideicomiso. La sociedad salvadoreña ha sido engañada por el Gobierno, que habla de fideicomiso cuando en realidad se trata de un endeudamiento público, encubierto con la retórica del primero. No solo se miente, sino que se violenta la legalidad, pues lo que en la práctica se está haciendo —endeudar al Estado— exige el cumplimiento de un conjunto de procedimientos legales que la figura del fideicomiso permite sortear sin ningún problema. Sin embargo, el propósito de fondo es evadir el debate parlamentario en torno a la adquisición de préstamos. Se ha cambiado la palabra “préstamo” por la palabra “fideicomiso” —aunque en la práctica se trata de lo primero— y, de ese modo, se pasa por encima de la Asamblea Legislativa, pues ésta poco tiene que decir sobre un esquema de captación de recursos que el Gobierno ha promovido ante la opinión pública como el manejo de un patrimonio que le fue cedido para que lo administrara y usara en beneficio de la sociedad.

Sacar de la Asamblea Legislativa la discusión sobre los préstamos ha sido una jugada maestra del gobierno de Elías Antonio Saca. Pero se trata de una jugada que ha puesto de manifiesto, de forma abierta, un ejercicio autoritario del poder político. Pero si en el tema del fideicomiso el autoritarismo estatal se ejerció de una manera relativamente fina, en la coyuntura abierta con los sucesos del 5 de julio de 2006, la reciente captura de Mario Belloso y los sucesos de Suchitoto del 2 de julio de 2007, se ha mostrado en sus facetas más grotescas. En lo que se refiere al primero de los tres hechos mencionados, la muerte de los dos agentes de la UMO se constituyó en el factor desencadenante de una ofensiva autoritaria, en cuyo marco se pusieron a punto los instrumentos jurídicos orientados a contener, mediante la coerción, los focos de movilización social que comenzaron a cobrar presencia más permanente en la vida nacional, precisamente bajo la actual administración

gubernamental. Convertir las movilizaciones sociales en actos de terrorismo y juzgar a quienes participan en ellas como terroristas fueron objetivos con los que el gobierno de Saca se comprometió a fondo; esos objetivos fueron alcanzados con la aprobación de la ley antiterrorista, desde la cual se otorgan a los aparatos coercitivos del Estado poderes extraordinarios para que, so pretexto de luchar contra el terrorismo, impidan el ejercicio de derechos civiles y políticos irrenunciables. Precisamente, la reacción de la PNC ante la manifestación que se realizaba en Suchitoto —una reacción violenta y de abierto irrespeto a los derechos humanos— y el tratamiento dado por las autoridades a las personas capturadas, a la mayoría de las cuales se les ha aplicado la ley antiterrorista, están en sintonía con lo antes señalado.

Esta legalidad autoritaria se hizo acompañar de un discurso que comenzó a jugar, por una parte, con la identificación de movilizaciones sociales igual a terrorismo; y, por otra, movilizaciones sociales igual a FMLN. Es decir, el gobierno de Saca buscó obtener rentabilidad política de su ofensiva autoritaria, lo cual dio pie a una campaña de deslegitimación del FMLN con la mirada puesta en las elecciones de 2009. Cualquier pretexto fue bueno para que los voceros de ARENA —incluido el presidente Saca— hicieran ver al FMLN como lo peor que le pudo haber sucedido a El Salvador. La oposición del partido de izquierda a la adquisición de nuevos préstamos internacionales y el cierre de RCTV en Venezuela crearon un clima propicio para que la propaganda gubernamental arremetiera con virulencia contra los efemelenistas, calificados como “enemigos de la libertad”. En esta línea, aunque faltan dos años para las elecciones de 2009, desde el Gobierno se ha insistido, en más de una oportunidad, en que las dos opciones que se enfrentarían en ellas serían “libertad” y “comunismo”.

Las piezas del cerco autoritario contra el movimiento social y la deslegitimación del FMLN estaban cazando a la perfección cuando Saca inició su tercer año de gobierno. Sin embargo, faltaba el detonante que pusiera en funcionamiento el conjunto de esas piezas. Ese detonante fue la captura de Mario Belloso. Y es que ésta se ha convertido en la mejor oportunidad para medir la eficacia de los mecanismos autoritarios más sucios forjados previamente y no utilizados en todo su alcance hasta ahora. La captura de Belloso ha servido para muchas cosas.

Primero, para radicalizar el discurso antiterrorista del Gobierno, lo cual ha supuesto convertir a Belloso en el terrorista por excelencia. Segundo, para articular las actividades que se le atribuyen (tener y portar armas de fuego, participar en protestas públicas, conspirar contra el Gobierno, manipular e inculcar ideológicamente a grupos de jóvenes) en una estrategia más global de desestabilización del país, de la cual serían parte integrante tanto el movimiento social como el FMLN —este último principal responsable de esa supuesta estrategia desestabilizadora—. Tercero, crear un ambiente de legitimidad para las medidas de fuerza que irremediablemente se van a ejercer en contra del movimiento social, etiquetado de terrorista y

El FMLN no ha sabido cómo encarar la ofensiva autoritaria del Gobierno. No puede apelar a su compromiso con la democracia —la bandera más legítima que se puede alzar contra el autoritarismo—, porque no ha sabido sostenerlo públicamente sin ambigüedades; ambigüedades que le están costando caras en este momento.

contrario a la paz pública. Cuarto, llevar al FMLN hasta una posición en la cual sólo le quedan dos alternativas igualmente perniciosas: el silencio, que supondría la aceptación de las acusaciones que el Gobierno ha tejido en su contra, o la reafirmación pública —como defensa— de referentes ideológicos más tradicionales, con lo cual el Gobierno obtendría las “pruebas” de sus acusaciones contra los efemelenistas. Y, quinto, poner a punto la alianza de ARENA con las grandes empresas mediáticas en vistas a las elecciones de 2009, que, como ya se señaló, están siendo presentadas a los salvadoreños y salvadoreñas como escenario de una lucha frontal entre libertad y comunismo.

En definitiva, peligrosos dinamismos autoritarios se han desencadenado en el país en el contexto de la captura de Mario Belloso y los sucesos de Suchitoto. Ciertamente, esos dinamismos han tenido su foco de irradiación en el aparato estatal, pero han contado, para ser eficaces en el plano del imaginario colectivo, con la complicidad de las grandes empresas de comunicación. Pocas veces en la posguerra los grandes medios habían llegado tan lejos en su alianza con los gobiernos de ARENA como ha sucedido en la actual coyuntura. Se plegaron —es de suponer que con total complacencia— a una de las prácticas autoritarias más viejas: la obtención de testimonios en los recintos policiales —violentando la dignidad de las personas sometidas a interrogatorio, así como su derecho a no declarar nada que pueda ser usado en su contra sin la presencia de un abogado— y su uso público con la finalidad de denigrar o incluso destruir a la oposición socio-política. Los grandes medios no escatimaron en espacio y recursos para facilitarle al Gobierno el uso de las declaraciones de Belloso con el propósito de denigrar al movimiento social y legitimar la violencia en su contra, así como para atribuir al FMLN las peores intenciones respecto del país, sus instituciones y sus leyes.

El FMLN, por su parte, no ha sabido cómo encarar la ofensiva autoritaria del Gobierno. No puede apelar a su compromiso con la democracia —la bandera más legítima que se puede alzar contra el autoritarismo—, porque no ha sabido sostenerlo públicamente sin ambigüedades; ambigüedades que le están costando caras en este momento. Un ejemplo: no haber tomado distancia de forma inmediata, con la respectiva condena, de quienes realizaron el ataque armado contra la policía el 5 de julio del año pasado. Sin embargo, aunque el FMLN fuera menos ambiguo, seguramente el Gobierno y la derecha seguirían considerándolo una amenaza para sus pretensiones hegemónicas.

Quizás el FMLN podría sumar a su favor a sectores sociales críticos, que no dudarían en comprometer sus energías y prestigio en apoyo de un partido con credenciales democráticas irrefutables que está sufriendo los embates del autoritarismo. Este debería ser el giro estratégico que debería operarse en el FMLN. En lo inmediato, es obligación suya hacer cuanto esté a su alcance para no seguir alimentando las tensiones socio-políticas. Hacer lo propio, en la misma dirección, le corresponde al Gobierno, a la derecha y a las grandes empresas de comunicación. Y a la sociedad le corresponde ser más vigilante y crítica del poder político y mediático, siempre al acecho de los derechos y las conciencias de los ciudadanos y ciudadanas. Cada actor social tiene una responsabilidad particular en la distensión socio-política, pero de algunos de ellos cabe esperar una contribución mayor a la construcción de una convivencia social no solo menos conflictiva, sino más

justa y solidaria. En este sentido, iglesias, universidades, medios de comunicación y corporaciones empresariales —ya sea por su prestigio o por su capacidad de incidencia colectiva— deberían comprometerse más a fondo con la democratización no solo política, sino social, cultural y económica de El Salvador.

San Salvador, 24 de julio de 2007.